

LOS EMPRESARIOS Y LA DERECHA EN MÉXICO

RICARDO TIRADO

Los gobiernos posrevolucionarios mexicanos excluyeron a los empresarios de la acción política organizada, pública e institucionalizada. A diferencia de otras clases sociales, como los obreros y los campesinos, que sí fueron reconocidos como actores legítimos, los empresarios quedaron excluidos del juego político partidario abierto.

Sin embargo, esta clase social logró en el proceso de su constitución construir a lo largo del tiempo un conjunto de agrupaciones que aunque declaradamente “apolíticas” sirvieron como canales de expresión efectivos y eficaces, tanto para la defensa de sus intereses económicos gremiales, como, en coyunturas de conflicto, para su representación política.

Incluso en algunas coyunturas de conflicto particularmente álgido, el empresariado fue capaz de contribuir de manera importante a la formación de una coalición política opositora en la cual convergió con la Iglesia católica y el partido político tradicional de la derecha: el Partido Acción Nacional. Es de ese modo que en coyunturas de conflicto agudo con la burocracia política, los empresarios han logrado tener cierta expresión político partidaria por medio del PAN, además de contar con algunos apoyos importantes emanados de otras instancias de la sociedad civil.

Este trabajo se propone revisar sumariamente la convergencia de estos actores en cuatro diferentes coyunturas de conflicto político social en las últimas cinco décadas y plantear una hipótesis explicativa.

A fines de los años treinta

La activación popular y el reformismo cardenista de la segunda mitad de los años treinta van a dar lugar a muchas reacciones que desde lo profundo de la sociedad mexicana concitarán los esfuerzos de muy distintos grupos, sectores y clases para detener el reformismo. Son reacciones de amplísimo espectro en el cual a las presiones externas

de los gobiernos de los Estados Unidos y el Reino Unido se suman las fuerzas de militares, empresarios, terratenientes, políticos, las empresas petroleras expropiadas, la jerarquía eclesiástica, amplios sectores medios entre los que destacan militantes católicos y universitarios, y aun grupos de obreros y campesinos.

Las movilizaciones de la reacción alcanzaron una gran fuerza, pero la gran diversidad de los grupos concurrentes, la heterogeneidad de sus agravios y la complejidad de sus vínculos, impidió que pudieran articularse en un solo y único gran frente opositor. Fue por ello que su acción se canalizó a través de “dos coaliciones verticales, dominada cada una de ellas por facciones conservadoras” (Hamilton, 1983: 243) que a la postre lograron imponerse.

Cada una de las dos coaliciones conservadoras se aglutinó en torno de un candidato a la presidencia de la República: Manuel Ávila Camacho por un lado y Juan Andreu Almazán por el otro, y aunque la lucha electoral fue dura, el eje del conflicto se planteó no en términos de antagonismos de clase o de cuestiones ideológicas, sino en cuanto a “la naturaleza de su relación con el Estado mexicano” (*ibid.*). Esto es, una coalición, la oficial avilacamachista, se proclamaba continuadora del gobierno cardenista, mientras que la almazanista se presentaba como una fuerza externa que terminaría con esa continuidad.

En el conjunto del movimiento de la reacción, los empresarios van a desempeñar un papel importante apoyando a ambos contendientes. Pero su presencia fue más notable del lado almazanista en donde figuraron de manera prominente los empresarios norteros, especialmente los de Monterrey, terratenientes y compañías estadounidenses (*ibid.*: 241-243, Fuentes, 1976: 105).

Es en esta coyuntura político social de conflicto y de lucha contra el reformismo donde surge en septiembre de 1939 el Partido Acción Nacional (PAN).

El PAN se fundó por obra de líderes de tres diversos grupos principales: militantes católicos provenientes de los sectores medios, empresarios y terratenientes, e intelectuales, universitarios y profesionistas también de clase media, agraviados cada uno de ellos principal y respectivamente por los siguientes cargos: la violación de las libertades religiosas y “los derechos de la Iglesia”; las amenazas al derecho de propiedad privada y la libertad de empresa, y los peligros para la supervivencia de las libertades de cátedra y enseñanza. Un agravio más, generalizable a los tres grupos, era el creciente “intervencionismo socializante” del Estado en todos los órdenes.

Desde un principio se estableció un vínculo claro entre el nuevo partido y la Iglesia católica, ya que el partido se acogió (como años más tarde lo haría también la Confederación Patronal de la Repúbli-

ca Mexicana [Coparmex], la más aguerrida de las organizaciones empresariales),¹ a la llamada *doctrina social de la Iglesia* que por medio de las encíclicas papales dedicadas a la “cuestión social” fue desarrollando y amalgamando un conjunto de principios abstractos emanados del liberalismo económico y del pensamiento neotomista, cuyo eje fundamental fueron los conceptos de persona humana, trascendencia, derechos naturales, propiedad privada, asociaciones intermedias, bien común y Estado subsidiario.²

Estos nexos con la Iglesia se hicieron también muy manifiestos por la importante militancia católica de los fundadores, líderes y seguidores del partido, entre los cuales destacan: Efraín González Luna, fundador, ideólogo y líder panista, quien fuera presidente de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM), organización con la cual estuvo ligado por lo menos desde el año de 1918;³ Luis Calderón Vega, Carlos Septién García, Carlos Ramírez Zetina, Miguel Estrada Iturbide, Daniel Kuri Breña y Luis Hinojosa, todos ellos fundadores del PAN y miembros de la Confederación Nacional de Estudiantes Católicos de México, organización afiliada a la ACJM que luego se transformaría en la Unión Nacional de Estudiantes Católicos (UNEC) (Romero y Jarquín, 1985: 20); e Isaac Guzmán Valdivia, fundador del PAN y cofundador también de la muy marcadamente confesional Unión Nacional Sinarquista (UNS) (Campbell, 1976: 289).

Por otra parte, el fuerte nexo establecido por el PAN con los empresarios, también desde su fundación, sería visible tanto en la ideología, como en la composición de su liderazgo, en el cual junto con sus más destacados dirigentes, como Manuel Gómez Morín (economista, intelectual y financiero muy vinculado al consorcio de los Garza Sada de Monterrey) (Hamilton, 1983: 289) y Efraín González Luna (accionista y miembro de los consejos de administración de la banca jalisciense) (Muría *et al.*, 1982: 528; ABM, 1941: 230, 279 y 288) figuraban también muchos otros empresarios; tantos, que en 1939 el primer comité ejecutivo nacional del partido se componía en un 38% de empresarios y financieros (Mabry, 1973: 35).

Pero el nexo partido-empresarios se hacía también transparente por la doble afiliación de algunos militantes empresarios al PAN y a las organizaciones empresariales; son los casos de los siguientes miembros fundadores del PAN: Carlos Novoa, exgerente de la Asociación

1 Véase en Cordero, Santín y Tirado (1983: 149-201) una comparación de documentos doctrinarios de la Iglesia y los empresarios.

2 Véase una comparación de los documentos doctrinarios del PAN con los de la Iglesia en González y Ramírez (1977: 212-235).

3 *Diccionario Porrúa*, t. 1, México, Porrúa, cuarta edición, p. 901; Muría (1982: 360).

de Banqueros de México (*Ibid.*), Daniel Kuri Breña, secretario de la VII Convención de la Coparmex celebrada en septiembre de 1941 (Mabry, 1973; Reyes, 1979: 28); Isaac Guzmán Valdivia, gerente del Centro Patronal de La Laguna y más tarde gerente de la Coparmex (Reyes, 1979: 30) Antonio L. Rodríguez, cofundador de la Coparmex en 1929, gerente de la Cámara de Comercio de Monterrey, vocero de la Junta Patronal de Monterrey en 1936, gerente del Centro Patronal de Monterrey, secretario del consejo directivo de la Coparmex en 1945, diputado federal panista electo en 1946 (uno de los primeros cuatro diputados que tuvo el PAN), candidato panista a la gubernatura de Nuevo León en 1949 y precandidato panista a la presidencia de la República en 1964 (Reyes, 1979: 18 y 38; Mabry, 1973: 36 y 44; Calderón, 1970: 100; E. R. O., 1981: 74-76);⁴ Manuel Gómez Morín, representante de la Coparmex en 1930 (Branch, 1970: 130), y Efraín González Luna, cofundador del Centro Patronal de Guadalajara (Mabry, 1973: 36).

La concurrencia de estos tres grupos —sobre todo la de los empresarios y los militantes católicos provenientes de las organizaciones vinculadas con la Iglesia— en la fundación del PAN en la coyuntura de fines de la década de 1930 exhibió la capacidad de las fuerzas de la derecha mexicana para articular una alianza orgánica política partidaria.

En los años cuarenta, en la medida en que el gobierno del presidente Ávila Camacho fue rectificando la dirección que el cardenismo había impuesto al gobierno, y más aún cuando el alemanismo consolidó la virtual liquidación del proyecto cardenista, los empresarios fueron abandonando paulatinamente al PAN, dejándolo en manos sobre todo de militantes católicos y otros grupos provenientes de los sectores medios urbanos.

A fines de los años cincuenta y principios de los sesenta

A fines de la década de los años cincuenta y principios de los sesenta tuvo lugar un período de agitación y movilizaciones sociales vinculadas básicamente con la activación sindical de diversos grupos de trabajadores (telegrafistas, telefonistas, electricistas, petroleros y so-

⁴ *Diccionario Porrúa*, t. II, México, Porrúa, 4a. ed., p. 2680; *Historia documental de la Confederación de Trabajadores de México*, t. I, 1936-1937, PRI, Instituto de Capacitación Política, México, 1981. p. 50.

bre todo maestros y ferrocarrileros); el fuerte impacto ideológico político suscitado por el triunfo de la Revolución cubana y la secuela de su radicalización y enfrentamiento con los Estados Unidos, y, finalmente, los intentos del gobierno del presidente López Mateos por reafirmar las bases de legitimación del régimen, efectuando algunas reformas económicas y sociales, desarrollando una política exterior más independiente —sobre todo en relación con la Revolución cubana—, radicalizando el discurso oficial y combinando ambiguamente tolerancia y represión hacia las movilizaciones de los trabajadores y la izquierda agrupada en torno del Movimiento de Liberación Nacional, la Central Campesina Independiente y el Frente Electoral del Pueblo.

El conjunto de las reformas planteadas por el gobierno incluían: incrementos a la inversión pública en ferrocarriles, electricidad y petróleo; mayor intervención estatal en la actividad económica que se tradujo en la nacionalización de las empresas eléctricas extranjeras y la adquisición por el gobierno de dos cadenas de salas cinematográficas y una empresa siderúrgica; la imposición de algunas taxativas a las inversiones extranjeras en los campos de la minería y la petroquímica; la reordenación de la industria automotriz transnacional, a la cual se conminó a incorporar en los vehículos terminados un porcentaje más alto de partes de fabricación nacional, y una modesta reforma fiscal que se proponía gravar al capital con impuestos más progresivos. Además, se planteó el incremento del gasto en materia de política social; la reglamentación de un sistema de participación por los trabajadores en las utilidades de las empresas; la realización de reformas legales tendientes a asegurar la estabilidad en el empleo y el lanzamiento de un programa educativo que contemplaba la edición y la distribución de textos gratuitos, obligatorios y únicos para todos los estudiantes de enseñanza primaria.

Contra esta política y contra la agitación y las movilizaciones a que antes se hizo referencia, se desarrollará en el cuatrienio 1959-1962 una serie de movilizaciones en las cuales coinciden los empresarios, el PAN y la Iglesia. La convergencia de estas fuerzas en una ideología anticomunista y antiestatista y en el reclamo común de no más intervencionismo estatal dará lugar a una movilización de muy amplias proporciones, ante la cual el gobierno lopezmateísta cederá finalmente, dejando franco el paso a la candidatura presidencial de un representante de la facción burocrática más autoritaria y anticomunista.

Entre los hechos más importantes que caracterizaron al movimiento se cuenta una fuerte campaña de prensa que presentó a las movilizaciones sindicales, universitarias y de la izquierda cardenista como producto de una “conjura comunista internacional”. La campaña opuso a la movilización popular, la agitación social, los desórdenes

callejeros, el reformismo cardenista y el intervencionismo estatal, los valores de la libertad, la religión, el orden, la familia, la identidad nacional y la estabilidad (Loaeza, 1983: 306-309).

En la campaña de prensa y las declaraciones de inconformidad empresarial se articulan las fuerzas tradicionales de la derecha: la Unión Nacional Sinarquista, el PAN y la Iglesia y sus organizaciones de laicos vinculadas a la Acción Católica, sobre todo la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y el Movimiento Familiar Cristiano (MFC), movidas por el *leit motiv* de la defensa de la libertad de enseñanza esgrimida frente al gobierno y en contra de los libros de texto y el artículo tercero constitucional.

Es notable también la aparición de muchas nuevas organizaciones, entre ellas el Frente Cívico Mexicano de Afirmación Revolucionaria (FCMAR) de filiación alemanista en el cual figuran algunos connotados empresarios; el Comité Coordinador de la Iniciativa Privada poblana y su virtual brazo armado: el Frente Universitario Anticomunista (FUA), y el MURO, gemelo de este último que operó en la Ciudad de México; la Cruzada Regional Anticomunista (CRAC) y la Unión Neoleonense de Padres de Familia (UNLPF), ambas sostenidas y dependientes de los empresarios de Monterrey; el Comité Nacional Coordinador de la Iniciativa Privada (CNCIP) y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, aparecidos ambos el 13 de septiembre de 1962.

La oposición empresarial a la política gubernamental tuvo sus expresiones más resonantes en las siguientes ocasiones: en el verano de 1960 cuando se produjeron serios desacuerdos con la declaración del presidente López Mateos del día primero de julio, en el sentido de que su gobierno era “dentro de la Constitución, de extrema izquierda” (Martínez, 1984: 130-132); la publicación a plena entera en la prensa nacional, el 24 de noviembre de 1960, del célebre desplegado titulado “¿Por cuál camino, señor presidente?” en el cual las principales organizaciones empresariales interrogaban al titular del ejecutivo sobre las perspectivas de su gobierno y si acaso se pretendía llegar al “socialismo de Estado” (Martínez, 1984: 143); la participación empresarial en la movilización de la derecha poblana en 1961; la insistente reiteración empresarial, a fines de 1961 y principios de 1962, de su reprobación al comunismo y sus advertencias al gobierno sobre los peligros del apoyo mexicano a las posiciones de la Cuba revolucionaria en los foros panamericanos; la movilización empresarial regiomontana de febrero de 1962; la publicación, el 13 de septiembre de 1962, en la prensa nacional de un desplegado más en el cual un Comité Nacional de la Iniciativa Privada aludía directamente a la sucesión presidencial que tendría lugar en el siguiente año y se manifestaba inconforme con la intervención en ella del expresidente Cárdenas (Loaeza, 1983:

618), y la emisión por parte de la Concamin, en marzo de 1964, de un importante documento doctrinario, la *Carta Económica Mexicana*, con el cual los industriales quisieron influir en los derroteros del nuevo gobierno que encabezaría el presidente Díaz Ordaz en diciembre de ese mismo año (Concamín, 1976: 37-39).

Otro aspecto relevante fue la realización de importantes actos de masas alentados por la Iglesia y sus organizaciones de laicos, la UNS, el PAN y los empresarios, sobre todo en los años 1961 y 1962, entre los que destacan los siguientes: la contramanifestación anticomunista que se efectuó en Puebla a fines de abril de 1961; la del 15 de mayo de 1961 en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México; la gigantesca realizada en el atrio de la catedral poblana el 29 de mayo de 1961, la cual fue continuada por otras más realizadas en los meses siguientes en franco enfrentamiento de la Iglesia, la iniciativa privada local y el FUA contra los universitarios (al grito de ¡cristianismo sí, comunismo no!, que resonaría por toda la República) (Loaeza, 1983: 505s); la gran movilización de los días 1 al 4 de agosto del mismo año en que los comerciantes poblanos cerraron las puertas durante dos días (Garmendia, 1974: 14), las manifestaciones celebradas en muchas ciudades de provincia en el segundo semestre de 1961, una de las cuales fue la celebrada a fines de agosto en Ciudad Obregón, Sonora, que bajo la presidencia del obispo local congregó a 20 000 personas y en la que participaron sacerdotes y dirigentes de la UNPF condenando al comunismo; la realizada en Monterrey, el 2 de febrero de 1962, bajo los auspicios directos del empresariado local por medio de la CRAC y la UNLPF, el PAN y la Iglesia mediante el MFC (Loaeza, 1983: 569-573); la movilización empresarial a propósito de la visita del presidente Kennedy a México en junio de 1962, a la que aprovechando la movilización popular y oficial se presentó como un “plebiscito antitotalitario” (Loaeza, 1983: 603), y las grandes manifestaciones realizadas en la Basílica de Guadalupe y en muchas ciudades de provincia el 9 de diciembre de 1962 para apoyar el concilio ecuménico y condenar nuevamente al comunismo (Loaeza, 1983: 627).

Los diferentes agentes y actores participantes: empresarios, sectores medios católicos, Iglesia y las organizaciones empresariales, cívico religiosas y políticas vinculadas a ellos, entre las cuales destacan desde luego las cámaras de comercio y los centros patronales locales junto con sus confederaciones Concanaco y Coparmex; la Concamin, el Comité Nacional Coordinador de la Iniciativa Privada y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios; el Comité Coordinador de la Iniciativa Privada de Puebla y el CRAC de Nuevo León; la UNPF, el MFC; la UNS, el PAN y el FCMAR; todos ellos lograron una articulación de fuerzas que es producto de la “natural” convergencia de actores ideológica

y políticamente afines en una amplia gama de cuestiones; que primero coinciden espontáneamente y luego se coordinan y apoyan recíprocamente constituyendo una verdadera alianza con vistas a lograr objetivos comunes: frenar a la izquierda, hacer que el gobierno de López Mateos desista de la reforma e influir en la sucesión presidencial.

En cuanto a las afinidades, los apoyos recíprocos y la coordinación entre estos actores, son de señalarse los siguientes hechos: 1) el uso de un mismo discurso anticomunista que reprueba a la Revolución cubana, advierte en contra de la izquierda mexicana, condena el intervencionismo estatal y exalta los valores de la nacionalidad, la religión y la familia; 2) las evidentes y explícitas conexiones entre los diferentes dirigentes y organizaciones activas, entre las cuales destacan: a) las establecidas entre el entonces presidente del PAN, José González Torres, y la Iglesia; González Torres, exseminarista jesuita fue presidente de la ACJM en 1944-1949, presidió la asociación internacional de intelectuales católicos Pax Romana de 1947 a 1949, recibió del papa Pío XII los nombramientos de caballero de las órdenes de San Gregorio y del Santo Sepulcro y, según un análisis, su gestión al frente de Acción Nacional se caracterizó porque trató de vincular a ese partido con la internacional demócrata cristiana, por su catolicidad y su defensa del capitalismo (Mabry, 1973: 72-73); b) las conexiones entre el PAN y la UNPF manifiestas en el amplio espacio que la revista panista *La Nación* concedió siempre a las actividades desarrolladas por los *paterfamilias* y en la candidatura para diputado federal por el PAN, en 1964, del doctor Francisco Quiroga Fernández, presidente de la UNPF (Villaseñor, 1978: 184; Mabry, 1973: 77; Calderón, 1970: 69); c) las conexiones entre los empresarios y la UNPF puestas de manifiesto con la creación de la filial neoleonesa de esa organización por empleados y ejecutivos de las empresas del consorcio Garza Sada, como Pablo Emilio Madero, y la presencia en su comité directivo de empresarios como José Cantú, representante de la cámara de comercio local, y Andrés Marcelo Sada, miembro de la familia propietaria del más grande grupo económico local (Loeza, 1983: 586, 594 y 613); d) las ligas entre los diferentes participantes, explícitas en la creación del CRAC de Monterrey por personas vinculadas al empresariado local, al PAN, a la UNPF, al MFC y a los Caballeros de Colón (Loeza, 1983, 565); e) los vínculos entre la iniciativa privada poblana y el FUA que fue fundado y sostenido por miembros del centro patronal local (Garmendia, 1974: 12-13), y f) el patrocinio económico por parte de los empresarios y políticos alemanistas del FCMAR a las diversas organizaciones anticomunistas, y 3) finalmente, la colaboración de los diferentes actores participantes en la planeación, organización y realización de muchas de las manifestaciones llevadas a cabo. Al respecto

son de destacarse los paros de empresarios poblanos y regiomontanos en agosto de 1961 y en febrero de 1962 y el auxilio recíproco cotidiano que Loaeza describe así en su documentado estudio:

La coordinación de la ofensiva dará lugar [...] a una colaboración muy estrecha entre todos los participantes. Eran los panistas quienes tomaban la palabra en los mítines organizados por el MFC o la UNPF en los atrios de las iglesias. Es más, esas organizaciones podían contar con el sermón dominical de los sacerdotes y con la manipulación de los símbolos religiosos para conmover a la gente y conducirla a la participación. Por otra parte, se podía ser miembro del MFC sin por ello estar inscrito en el PAN o en la UNPF [...] la convergencia de sus objetivos los condujo a la formación de un poderoso bloque de acción unificada (Loaeza, 1983: 504-505).

De todo lo anterior es posible concluir que las movilizaciones de los primeros años de la década pasaron de un primer momento de convergencia a otro de articulación y alianza en el cual las diferentes fuerzas y actores se coordinan y apoyan recíprocamente, dando así lugar a un articulado movimiento de derecha.

La movilización derechista estuvo además acompañada de una reducción de la inversión privada y de una fuga de capitales que, se dice, de no haber sido por los apoyos oportunos otorgados por diferentes agencias internacionales, hubieran ocasionado que el peso mexicano se devaluara.

Desde 1961, sin embargo, el presidente López Mateos y sus principales colaboradores se empeñaron en una campaña para restablecer la confianza del empresariado, ofreciéndole las amplias garantías que demandaba, de tal modo que en 1962 podía afirmarse que el reformismo oficial había sido cancelado y las buenas relaciones reinantes desde la década de los cuarenta se habían restablecido (Vernon, 1973: 138-139).

En la primera mitad de los setenta

En la primera mitad de los años setenta, en una coyuntura que se caracteriza por la crisis económica, la activación de sectores populares (obreros, colonos y campesinos) y un nuevo proyecto oficial de reformas, se da una nueva movilización de la derecha.

El principal elemento dinamizador de la movilización derechista parece ser el intenso debate ideológico político protagonizado por el

gobierno y los empresarios y en el cual los contendientes se interpelan recíprocamente con calificativos de muy fuertes resonancias simbólicas: “empresarios reaccionarios que no quieren ceder nada” y “burócratas socialistas que quieren estatizar todo” (para esta parte véase Tirado y Luna, 1984).

En su lucha contra el reformismo promovido por el gobierno, los empresarios experimentan un proceso de politización que al final del sexenio es muy evidente. Este proceso de creciente politización empresarial es detectable en el reemplazo de líderes empresariales moderados por otros más radicales como Andrés Marcelo Sada, en la conversión de sus agrupaciones de grupos de presión gremialistas en auténticas organizaciones de clase; en la radicalización de paros en distintos lugares y momentos (en Puebla en mayo de 1973, en Monterrey en septiembre de 1973, en Monterrey nuevamente en junio de 1974; en el noroeste en diciembre de 1975 y en varios lugares en noviembre de 1976); en la creación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en mayo de 1975 que postuló en sus documentos un incipiente proyecto empresarial para el futuro del país, y en el llamado explícito de los líderes de la facción empresarial más radical a la acción política y partidaria.

Por otra parte, la movilización empresarial comenzará poco a poco a converger con otras fuerzas hasta devenir en 1975 y 1976 en un movimiento de derecha el cual, aunque desarticulado, inorgánico y sin un liderazgo muy visible, fue capaz de dividir a la burocracia política y derrotar al reformismo oficial. Sin duda las crecientes militancias antigubernamentales del PAN y de la Iglesia y su paulatina convergencia con la movilización empresarial fueron fenómenos importantes en el desarrollo de la movilización de la derecha.

En efecto, en el PAN se observa el fortalecimiento de una corriente muy dinámica, pragmática, electorera y anticomunista que —a costa de las corrientes tradicional y solidarista— alcanza la presidencia del partido en marzo de 1972, vía la persona de José Ángel Conchello, exfuncionario de la Concamin y publicista muy ligado al grupo Monterrey (Mabry, 1973: 93; E.R.O.: 1981).

La Iglesia por su parte había comenzado en 1972 a tomar posiciones contrapuestas a las del gobierno en diferentes materias como la política de control natal y la reforma educativa que se proponía revisar los libros de texto oficiales para la educación primaria.

Esta última cuestión, la de los libros de texto oficiales y su nueva redacción en la que se recogieron posiciones de corte tercermundista y en favor de la educación sexual, fue la que dio pie al más claro momento de convergencia entre los empresarios, el PAN y la Iglesia contra el reformismo auspiciado por el gobierno en el sexenio de

Echeverría. En efecto, a fines de 1974 y principios de 1975 son muy visibles las militancias afines y convergentes de los tres actores en contra de los mencionados libros de texto (Arias *et al.*, 1981: 65-66; Villaseñor, 1978: 192).

Pero la convergencia política explícita de estos actores no irá mucho más allá pues, por diferentes razones, tanto la Iglesia como el PAN renunciarán a una alianza más estrecha con los empresarios en esa coyuntura.

El rechazo a la alianza tuvo su más clara expresión en la negativa de ambos a dar su respaldo a los documentos del CCE de mayo de 1975, pero también se expresó en otros actos, en el caso de la Iglesia, incluso de adhesión al gobierno.

En relación con ese organismo empresarial y sus documentos doctrinarios, la Iglesia se abstuvo de apoyarlos guardando un significativo silencio y el PAN los criticó abiertamente argumentando, entre otras cosas, que la declaración de principios de los empresarios soslayaba la injusticia de que eran víctimas los trabajadores y los campesinos (Arriola, 1981: 113-117).

La negativa de la Iglesia a secundar a los empresarios obedeció, por un lado, a sus divisiones ideológico políticas internas causadas por los efectos combinados de la concientización que produjeron la represión al movimiento estudiantil de 1968, el Concilio Vaticano II y la conferencia de obispos latinoamericanos de Medellín en 1968 que se pronunció por una “opción preferencial por los pobres”, en un influente aunque minoritario sector progresista del clero mexicano que pugnaba porque se hicieran reformas sociales (De la Rosa, 1985: 272-273).

Pero la negativa eclesiástica se explica también por la actitud conciliatoria y receptiva del gobierno de Echeverría hacia la Iglesia. No sólo consultó y recogió en parte las opiniones de ésta en relación con las controvertidas políticas del control natal y los libros de texto, sino que de un modo sin precedentes en mucho tiempo, el gobierno, coincidiendo en ello también con los empresarios, apoyó ampliamente la iniciativa del ala conservadora de la jerarquía para construir una nueva Basílica de Guadalupe y además el mismo presidente Echeverría visitó al papa Paulo VI en Roma en 1974 y lo invitó a venir a México para la inauguración de la nueva basílica que se haría en 1976 (Arias *et al.*, 1981: 71-72; Loaeza, 1984: 152-157).

En el PAN, las corrientes solidarista y tradicional lograron recuperar terreno y alcanzar con Efraín González Morfín la presidencia del partido en marzo de 1975. Y aunque la gestión de González Morfín fue muy corta pues la resistencia de los pragmáticos conchellistas lo hizo renunciar a la presidencia de su partido en diciembre de 1975,

las fuerzas unidas de los solidaristas y los tradicionalistas —aunque ya en clara minoría dentro de su partido— fueron aún suficientes para impedir la postulación del conchellista Pablo Emilio Madero (alto ejecutivo de una empresa vidriera adscrita al grupo Monterrey y exdirigente de la UNLPF) como candidato a la presidencia de la República en 1976 y colocar en la dirección del partido a un seguidor de la línea tradicional que hasta impuso sanciones al propio Conchello.

Fue de ese modo que en 1975-1976 la convergencia de los principales actores y fuerzas tradicionales de la derecha mexicana topó con obstáculos tales que impidieron que cuajara una nueva alianza entre ellos. No obstante, el movimiento de la derecha fue muy eficaz en su oposición al reformismo gubernamental y a esa eficacia contribuyó decididamente la acción de nuevos sectores medios —diferenciados de los viejos militantes católicos con reminiscencias hispanistas— caracterizados por su antiestatismo y su alta propensión al consumo, los cuales aunque desorganizados, heterogéneos y difusos fueron capaces de mellar gravamente la imagen del gobierno utilizando como medio la difusión de rumores y el escarnio de la figura presidencial.

En los años ochenta

Los efectos devastadores de la crisis económica desatada a mediados del año 1981, cuando cayeron los precios del mercado petrolero internacional, comenzaron pronto a producir un nuevo desacuerdo entre los empresarios y el gobierno. Pero es la nacionalización de la banca privada decretada por el presidente López Portillo el 1 de septiembre de 1982 el acto que abre una nueva coyuntura de conflicto rica en movimientos de las distintas fuerzas políticas y enfrentamientos de proyectos encontrados.

Uno de los efectos inmediatos de la radical medida fue la repolitización súbita del empresariado, el cual, agraviado por la crisis económica y la nacionalización bancaria, recuperó de inmediato la memoria de sus luchas políticas del pasado reciente (sobre todo las que dio en contra del reformismo echeverriísta) y se perfiló rápidamente como un nuevo sujeto político cualitativamente diferente (Luna, Millán y Tirado, 1985).

Las fuertes tomas de posición gubernamental y empresarial, nacionalizando la banca y condenando la nacionalización, suscitarán una dialéctica de afinidades y diferencias que durante un corto tiempo se impone a todo el espectro de las fuerzas políticas, concretándose en

dos polos y alineamientos contrapuestos y centrados en el gobierno y los empresarios y cuyos meollos simbólicos son la aprobación o la condena del acto expropiador.

Para fortalecer su polo, el empresariado —sobre todo su facción más combativa y radical— tratará de mantener vivo el momento privilegiado del agravio y la agitación que congregan fuerzas, convocando primero a un fallido paro empresarial nacional, luego a unas ruidosas reuniones denominadas “México en la libertad”, en las cuales apareció claramente un nuevo discurso empresarial, y repudiando más tarde las ofertas presidenciales para renegociar la alianza entre el gobierno y los empresarios.

No obstante que estos esfuerzos politizadores encontraron tropiezos (el más evidente y notorio de los cuales fue el allanamiento de una parte del empresariado con la medida expropiatoria), el empresariado parece haber logrado reconstituirse como un sujeto dotado de una nueva voluntad política, un incipiente proyecto de nación y un nuevo discurso de probada eficacia, en el cual el Estado, el gobierno y lo público, quedan asociados con el autoritarismo, el presidencialismo y la corrupción gubernamental y contrapuestos a una sociedad civil de la que el empresariado se postula como el actor hegemónico (Millán, 1984: 26-39).

Es en este contexto de tensión, flujo, polarización y alineación que se produce una nueva convergencia nítida entre la Iglesia y el PAN con los empresarios: ambos sectores condenarán también la nacionalización bancaria.

Desde fines de los setenta, el sector centrista y hegemónico de la Iglesia había venido acercándose, después de neutralizar a los cristianos de izquierda, a posiciones cada vez más conservadoras y militantes, demandando de manera progresivamente franca el reconocimiento de derechos secularmente alegados para la institución eclesiástica e interviniendo de manera cada vez más clara en asuntos político electorales. A esta creciente militancia clerical contribuyeron sin duda la visita que realizó el candidato López Portillo durante su campaña a muchos obispos y desde luego la enorme movilización popular que suscitó el viaje de Juan Pablo II en 1979.

En cuanto al PAN, es claro que la salida de los solidaristas en 1978, la candidatura de Conchello a la gubernatura de Nuevo León en 1979 y la postulación de Pablo Emilio Madero como candidato panista a la presidencia de la República para las elecciones de 1982 mostraban claramente que la facción neopanista encabezada por Conchello y el propio Madero había sido capaz de hegemonizar al partido imponiéndose a las facciones tradicional y solidarista.

Estos antecedentes muestran las vicisitudes que facilitaron una nue-

va convergencia de posiciones entre los empresarios, el PAN y la Iglesia; convergencia que la reacción ante la nacionalización bancaria trasmutó abruptamente en una nueva alianza de las derechas mexicanas. La alianza tomará cuerpo en algunas de las campañas del PAN y mostrará su efectividad en los triunfos panistas en varias entidades del norte de la República, en Puebla y en otros lugares. Sin duda los más sonados triunfos fueron los de Chihuahua en 1983, en donde el 70% de la población, incluidas las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez, habita en municipios gobernados por alcaldes panistas (véase Luna y Tirado, 1985: 65-78).

Después de estos descalabros del PRI, el gobierno echó marcha atrás en la aplicación de la "renovación moral" en materia electoral y desconoció los triunfos del PAN en otras entidades.

Ante las elecciones para diputados federales de julio de 1985 la alianza derechista se fortaleció y mostró de manera clara y transparente a los empresarios panistas (entre los más destacados figuraron: Madero, Conchello, Clouthier, Basagoiti, Rosas, Canales Clariond, Elourduy, Villa Escalera, Amaya Rivera, Goycochea, Coindrau, los hermanos Marcelo y Rogelio Sada Zambrano, Rice, etcétera) actuando articuladamente con la jerarquía eclesiástica especialmente en Sonora, Chihuahua y Puebla; a la embajada estadounidense apoyando al PAN y a éste fortaleciendo sus vínculos con la nueva derecha internacional por medio de su asistencia a la convención del partido republicano y el estrechamiento de ligas con la UDI (Unión Democrática Internacional) y la ODCA (Organización de la Democracia Cristiana en América) y a otras agrupaciones del mismo corte.

La derrota panista: el PAN no ganó ni cuatro decenas de diputaciones ni la gubernatura de ningún estado, siendo que había proclamado que constituiría una "Nueva mayoría" y ganaría al menos las gubernaturas de Nuevo León y Sonora; sin embargo, logró algo a su favor: deslegitimó aún más al PRI y al gobierno exhibiendo ruidosamente en México y sobre todo en el exterior la "alquimia" priísta con la cual el partido oficial se adjudica triunfos que no le corresponden.

Una hipótesis a manera de conclusión

La dinámica del sistema político mexicano es tal que en coyunturas de desajuste económico y/o de ascenso de las luchas populares y/o de creciente deterioro de la legitimidad, el gobierno impulsa reformas económicas sociales que generan un álgido conflicto en cuyo desarro-

llo se desata una dialéctica de afinidades y diferencias que durante un tiempo más o menos corto tiende a imponerse a todo el espectro de fuerzas, agentes y actores políticos, concretándose en dos polos y alineamientos contrapuestos, centrados en el gobierno —impulsor de las reformas— y las fuerzas opositoras y cuyos meollos simbólicos son el apoyo o el rechazo a las reformas, pero también, aunque de manera menos clara, involucran posiciones afines frente a muchas cuestiones.

El conflicto presenta generalmente un perfil ideológico político muy acusado y atraviesa por diversas fases sucesivas de agravamiento durante las cuales tiende a producirse en la oposición la convergencia de un amplio espectro de fuerzas y actores en general heterogéneos por sus bases, diversos en cuanto a los agravios que mientan y complejos en su interrelación.

A veces, las diferencias entre los opositoristas tienden a impedir que la convergencia cuaje en una verdadera alianza y que las distintas movilizaciones de los opositores confluyan en un único y compacto movimiento de reacción. Sucede entonces que la convergencia de las diferentes movilizaciones da lugar a un movimiento bofo, carente en general de organización, dirección unívoca, presencia callejera apreciable y demandas claras y distintas. Sin embargo, esto no le impide tener eficacia, pues pese a su gelatinosidad suele causar un profundo impacto que se distribuye y repercute en todos los espacios sociales, incluyendo a la propia burocracia política a la cual tiende a fracturar en su unidad ideológico política.

Las fuerzas, agentes y actores principales que reaccionan ante los reformismos gubernamentales son sobre todo los empresarios, el PAN y la Iglesia católica. El acentuado carácter ideológico político del conflicto tiende a hacerlos converger sobre la base de sus afinidades y coincidencias e incluso a veces logran articular una alianza que se traduce en coordinación y apoyos recíprocos.

En general son los empresarios quienes asumen el liderazgo de la reacción y hegemonizan al movimiento opositor. Sin embargo, los sectores medios son clave porque su ubicuidad social, el “capital educativo y cultural” que poseen y el prestigio y la relevancia social de que gozan, les permite constituirse en transmisores privilegiados de la ideología.

Estos sectores medios son importantes estén o no organizados. En el pasado fue muy importante la militancia de sectores medios católicos en el PAN y otras organizaciones cívico religiosas, pero desde la década de los setenta parece incrementarse el peso de otros sectores medios, en general poco organizados, que son más profanos y propensos al consumo, aunque no menos antiestatistas.

La Iglesia católica también es clave tanto porque fuera del gobierno es quizás el actor político más consolidado y maneja símbolos arraigados muy profundamente en amplios sectores de la población de un país donde la abrumadora mayoría confiesa ser católica.

Estos contramovimientos sociales de reacción antirreformista han sido capaces de generar corrimientos del espacio social de opinión pública y acción política hacia la derecha, mediante una compleja operación que podemos describir así: en primer lugar, las organizaciones empresariales, abandonando su “normal” actuación de grupos de presión comienzan a transformarse en polos de atracción de los propios empresarios, luego se sucede un “cierre de filas” en el interior de las organizaciones empresariales mismas, lo cual supone un “ajuste de cuentas” entre líderes, la expulsión de los tibios y contemporizadores con el reformismo y el acceso de otros más duros y combativos.

Luego sigue una creciente convergencia y concentración de grupos, fracciones y facciones empresariales que acuden ahí en la medida en que se sienten más atemorizados y esa sensación de amenaza —como observó O'Donnell en el cono sur— crece como progresión geométrica y no aritmética con lo que realmente les está afectando. La intensidad de la reacción se relaciona más con la sensación de amenaza que con la profundidad de las reformas realizadas.

En la medida en que el centro de oposición se va fortaleciendo, y contemporáneamente a ello, diversas fuerzas tienden a converger hacia él potenciándolo enormemente. Un apoyo del exterior a la reacción presiona al gobierno en tanto que “ensucia” el prestigio internacional de México.

La potenciación convierte a ese centro de atracción original de empresarios en un verdadero polo de concentración de una oposición social generalizada que ya no sólo incluye a empresarios sino también a sectores medios y atrae y se articula con la Iglesia y el PAN. La atracción de la Iglesia al polo opositor es facilitada porque el gobierno, para hacer avanzar las reformas, suele incluir en su discurso elementos ideológicos encaminados a concitar apoyos que por otra parte tienen el efecto de enajenarle a la Iglesia.

Todo lo anterior hace que el movimiento y el fuerte polo de derecha que se ha constituido jalonee fuertemente los espacios de opinión pública y acción política (la “publicidad”), arrastrando con él al centro político del espectro de opiniones, ideologías, fuerzas y partidos, de tal manera que se modifica la correlación de fuerzas.

La emergencia de ese polo de derecha, el desarrollo del movimiento y el desplazamiento del espacio de opinión pública y acción política, genera los siguientes efectos adicionales:

1) Da cabida en el espacio de la política —“legítima”— a órganos

de opinión, grupos y partidos políticos que antes, por su extremismo derechista, estaban fuera del ámbito de la política válida. Del mismo modo, otros grupos en el extremo opuesto del espectro son nulificados y marginados de ese ámbito válido.

2) Se crean o fortalecen los partidos de derecha y también se fortalece el ala derecha del gobierno y la facción burocrática más derechista.

3) La emergencia de ese polo y la fuerza del movimiento que aliena tienden a dividir a la burocracia política en dos facciones contrapuestas: una, que en el forcejeo interburocrático gana contemporizando con el movimiento de la reacción y acercándose a ese pueblo con una propuesta muy similar a la que emana de él (aunque use una retórica en la cual hace denuncia de la “reacción”) y otra, que se radicaliza y lanza propuestas encaminadas a profundizar las reformas, pero que finalmente es derrotada.

El quebrantamiento de la unidad burocrática proviene de las vulnerabilidades del polo gubernamental que en el inicio del conflicto parece ser más sólido de lo que es. La vulnerabilidad del gobierno proviene de que titubea mucho en su voluntad de efectuar realmente las reformas anunciadas y propiciar la movilización popular necesaria para realizarlas. Y titubea porque teme, por una parte, ser rebasado por los sectores populares movilizados y, por otra, dar pie a una intensificación más amplia de la reacción opositora. Ese titubeo desgasta enormemente al gobierno y tiende a ahondar las fisuras interburocráticas hasta el grado de que al final del sexenio cristalizan dos facciones burocráticas enfrentadas: la reformista y la antirreformista, encabezadas por los presidentes de la República saliente y entrante respectivamente.

Estos movimientos de la derecha han sido eminentemente reactivos, pues al momento privilegiado del conflicto, la tensión, el flujo, la condensación y la acumulación de fuerzas, siempre ha seguido un segundo momento de distensión, reflujo y dispersión de fuerzas. Sin embargo, en la coyuntura actual, la acumulación de experiencias, aprendizaje y memoria de los empresarios parecen indicar que este agente social se ha reconstituido modificándose cualitativamente al desarrollar una nueva voluntad política.

Bibliografía

- Arias, P. *et al.*: (1981), *Radiografía de la Iglesia en México*, México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, Cuadernos de Investigación Social, núm. 5.
- Arriola, C.: (1981), *Los empresarios y el Estado*, México, Sepoventas, núm. 3.
- Asociación de Banqueros de México (ABN): (1941), *Anuario Financiero*, vol. 1, México, Editorial Cultura.
- Branch, H.: (1970), "Informe 1929-1930", en *La Confederación de Cámaras Industriales a través de los informes de sus presidentes*, t. I, México, Concamin.
- Calderón Vega, L.: (1970), *Reportaje sobre el PAN*, México, Ediciones de Acción Nacional.
- Campbell, Hugh: (1976), *La derecha radical en México. 1929-1949*, México, SEP, Sepsetentas, núm. 276.
- Concamin: (1976), *La Confederación de Cámaras Industriales. Integración, organización, funciones, objetivos*, México, Concamin.
- Cordero, Santín y Tirado: (1983), "El proyecto empresarial: ¿alternativa del proyecto nacional?", en Cordero *et al.*, *El poder empresarial en México*, I, México, Terra Nova.
- De la Rosa, M.: (1985), "Iglesia y sociedad en el México de hoy", en *Religión y política en México*, México, Siglo XXI.
- E.R.O.: (1981), "Conchello vs. el PRI y ciertos panistas", en *Contenido*, núm. 217, México, junio.
- Fuentes Mares, J.: (1976), *Monterrey. Una ciudad creadora y sus capitanes*, México, Jus.
- Garmendía, D.: (1974), *Los sucesos del 1o. de mayo en Puebla*, Puebla, UAP.
- González Graf, J. y A. Ramírez Lugo: (1977), "Partido Acción Nacional", en A. Delhumeau (dir.) *México: realidad política de sus partidos*, México, Instituto Mexicano de Estudios Políticos.
- Hamilton, N.: (1983), *México: los límites de la autonomía del Estado*, México, Ed. Era.
- Loeza, Soledad: (1983), *Classes moyennes, démocratie et nationalisme au Mexique*, tesis de doctorado de estado, Institut d'études politiques de Paris, París, mimeo.
- Loeza, Soledad: (1984), "La Iglesia católica mexicana y el reformismo autoritario", en *Foro Internacional*, vol. XXV, núm. 2 (98), México, octubre-diciembre.

- Luna M. y Ricardo Tirado: (1985), "Los empresarios se deciden", en *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, año 31, núm. 120, México, abril-junio.
- Luna, Millán y Tirado: (1985), Una nueva voluntad política: los empresarios en los incisos del gobierno de Miguel de la Madrid, inédito.
- Mabry, Donald: (1973), *México's Acción Nacional*, Syracuse, University of Syracuse.
- Martínez Nava, J. M.: (1984), *Conflicto Estado empresarios en los gobiernos de Cárdenas, López Mateos y Echeverría*, México, Nueva Imagen.
- Millán, R.: (1984), El concepto empresarial de sociedad civil", en *Estudios Políticos*, nueva época, vol. 3, núm 2. México, abril-junio.
- Muría, J. M. et al.: (1982), *Historia de Jalisco*, tomo IV, Guadalajara, Gobierno del Estado de Jalisco, UNED.
- Reyes Ponce, A.: (1979), *Coparmex. Su origen y su desarrollo*, México, Coparmex.
- Romero, J. y Jarquín V.: (1985), *Un PAN que no se come. Biografía de Acción Nacional*, México, Ediciones de Cultura Popular.
- Tirado, R. y M. Luna: (1984), La politización de los empresarios, 1970-1982, inédito.
- Villaseñor, G.: (1978), *Estado e Iglesia: El caso de la educación*, México, Edicol.
- Vernon, R.: (1973), *El dilema del desarrollo de México*, México, Diana.